



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, quince de junio de dos mil veintiuno

19-294

Proceso:	APELA SENTENCIA
Demandante:	JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA
Demandados:	COLPENSIONES y C.I. BANACOL S.A. EN REORGANIZACIÓN
Radicado No.:	05001-31-05-011-2016-00409-01.
Decisión:	MODIFICA SENTENCIA

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 18** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que se **CONDENE** a la empresa **C.I. BANACOL S.A.** a reconocer y pagar el título pensional o calculo actuarial por el tiempo laborado y no aportado entre el 15 de junio y el 20 de diciembre de 1983 de conformidad con el literal e) del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Como consecuencia de lo anterior, solicita se **CONDENE** a **COLPENSIONES** a realizar el cálculo actuarial que debe cancelar la empresa C.I. BANACOL SA a recibirlo y abonarlo al reporte de semanas cotizadas en pensiones y teniendo en cuenta lo anterior se reconozca y pague la pensión de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que nació el 10 de agosto de 1952, por lo que arribó a los 60 años de edad el mismo día y mes del año 2012.
- Que se afilió al ISS el 18 de febrero de 1972.
- Que laboró en la empresa C.I. BANACOL S.A. desde el 15 de junio de 1983 hasta el 20 de diciembre del mismo año, lapso durante el cual su empleador no realizó aportes a pensión para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, sosteniendo que para esa fecha el ISS no tenía cobertura en la zona de Urabá.
- Que para el 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad y se encontraba cotizando al régimen de prima media, por lo que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 tenía más de 750 semanas cotizadas al sistema.
- Que su historia laboral presenta varias inconsistencias como semanas en mora, imputación de pagos y períodos incompletos, por lo que ha solicitado en varias oportunidades su corrección, sin haber obtenido respuesta positiva.
- Que el 23 de agosto de 2013 solicitó a COLPENSIONES la pensión de vejez, prestación que le fue negada a través de la Resoluciones GNR 7994 de 2014 y GNR 389203 del mismo año.
- Que las inconsistencias de la historia laboral ascienden a 21.59 semanas, más las 26.44 semanas laborados con BANACOL donde no se realizaron aportes, sumadas a las 960.57 semanas, arroja un total de 1.008,6 semanas, con las cuales acredita los requisitos del Decreto 758 de 1990.
- Que conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la orfandad legislativa para la época que no había cobertura por el ISS no puede ir en contra de los intereses del trabajador, máxime cuando el derecho a la pensión de vejez es un derecho fundamental.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. RESPUESTA DE COLPENSIONES

Controvirtió el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como cierto la fecha de nacimiento del actor, la fecha en que se afilió al ISS, el contenido de la certificación expedida por C.I. BANACOL que da cuenta que no se afilió al actor porque no había cobertura en Urabá para el año 1983 y el contenido de las resoluciones expedidas por la entidad. De otro lado indicó que no es cierto que el demandante tenga derecho a la pensión de vejez, ya que no reúne los requisitos exigidos para tal fin.

Respecto a los demás hechos indicó que no le constan o se trata de apreciaciones de la parte actora que serán objeto de debate probatorio.

1.3.2. RESPUESTA DE C.I. BANACOL S.A.

Se opuso al derecho pretendido. Respecto los hechos aceptó como cierto la vinculación del demandante a la empresa entre el 15 de junio y el 20 de diciembre de 1983, tal y como se indicó en la certificación expedida por la entidad, aclarando que no se efectuó afiliación y pago de aportes a pensiones porque el ISS no había iniciado su cobertura en la zona donde el demandante prestó sus servicios, toda vez que el llamado a inscripción en el municipio de Apartadó, región de Urabá, solo se dio a partir del 1º de agosto de 1986 a través de la Resolución 2362 de 1986. De otro lado indica que no es posible certificar los salarios devengados por el actor ya que han transcurrido más de 30 años desde su desvinculación a la empresa. Respecto a las demás afirmaciones señaló que no le constan o se trata de apreciaciones del demandante que ser objeto del debate procesal.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Dentro del trámite de la **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**, llevada a cabo por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín el 10 de septiembre de 2019:

CONDENÓ a C.I. BANACOL DE COLOMBIA SA EN REORGANIZACIÓN a reconocer y pagar a COLPENSIONES el cálculo actuarial por el tiempo comprendido entre el 15 de junio y el 20 de diciembre de 1983 a favor del señor **JORGE ALIRIO EUSSE SAVEEDRA**.

De otro lado **CONDENÓ a COLPENSIONES** a reconocer y pagar al señor **JORGE ALIRIO EUSSE SAVEEDRA**, la pensión de vejez a partir del 11 de agosto de 2012, teniendo en cuenta una mesada inicial de **\$1.463.360**, adeudándole un retroactivo de **\$154.968.496** liquidado hasta el 30 de septiembre de 2019, suma que deberá ser indexada a la fecha del pago y de la cual autorizó realizar el descuento de los aportes en salud. Y a partir del 1º de octubre de 2019 a continuar reconociéndole una mesada de **\$1.920.926**.

Así mismo **CONDENÓ** en costas a **COLPENSIONES**, en la suma de **\$3.312.464** y a la **C.I. BANACOL SA EN REORGANIZACIÓN**, en la suma de **\$1.656.232** a favor del demandante.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que dentro del plenario se encuentra acreditado que el demandante laboró para la C.I. BANACOL SA. entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año, hecho que además fue aceptado por la codemandada en la respuesta en la demanda. Y si bien es cierto que en la época en que el demandante laboró para la C.I. BANACOL SA. en el municipio de Urabá, no existía obligación de cotizar al ISS dado que no había iniciado la cobertura en la zona, esto no quiere decir este tiempo deba ser desechado, toda vez que la ley previó el pago de las cotizaciones por parte del empleador ante la entidad de seguridad social a través de un título pensional previo cálculo actuarial a fin de que el tiempo de servicios como trabajadores vinculados con empleadores que tenían a cargo el reconocimiento y pago de la pensión de vejez sea computado para determinar el cumplimiento del requisito mínimo de semanas para acceder a la pensión de vejez, sin que tenga relevancia el hecho de que el contrato de trabajo estuviera o no vigente a la entrada de la ley 100 de 1993, tal y como lo ha indicado de forma reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que el empleador tenía la obligación de hacer el aprovisionamiento para cubrir los riesgos pensionales que estaban en cabeza suya mientras dicho riesgo fue subrogado por el ISS.

Por lo que CONDENÓ a la C.I. BANACOL SA. a reconocer y pagar el respectivo cálculo actuarial a COLPENSIONES a favor del actor por los periodos en los cuales no se realizó la cotización por falta de cobertura, entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año, que equivalen a 26.57 semanas, teniendo en cuenta el salario que reporte BANACOL sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo, dado que no se probó el salario devengado por el actor.

De otro lado, indicó que el actor era beneficiario del régimen de transición en virtud de la edad, dado que al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, y contaba con 1.005,56 semanas en toda la vida laboral, teniendo en cuenta las 26.57 semanas que debe pagar CI BANACOL a través de título pensional, sumadas a las 960 semanas que aparecen en la historia laboral obrante a folios 18/19 y 18.42 semanas que fueron dejadas de contabilizar porque aparecen con inconsistencias donde se contabilizan menos días de los cotizados aplicando imputación de pagos por haberse realizado el pago de forma extemporánea o no haberse realizado, las cuales deben ser tenidos en cuenta en su totalidad, pues si COLPENSIONES no realizó las acciones de cobro tendientes a obtener el pago de los aportes en mora o cancelados extemporáneamente, esta omisión no tiene porque perjudicar el derecho pensional del afiliado.

Por consiguiente concluyó que el actor acreditaba los requisitos para acceder a la pensión de vejez dado que cumplió los 60 años de edad el 10 de agosto de 2012, y no se vio afectado por la reforma del

Acto Legislativo 01 de 2005, pues a la fecha de entrada en vigencia del mismo tenía más de 750 semanas cotizadas y además cotizó más de 1000 semanas en toda la vida laboral, por lo que CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer la pensión de vejez a partir de la fecha de cumplimiento de la edad, dado que se había retirado del sistema desde el 31 de agosto de 2002 y ninguna mesada se vio afectada de prescripción al haberse efectuado la reclamación antes de que transcurrieran los 3 años de que trata el artículo 151 del CPT y la SS.

Finalmente indicó que no proceden los intereses moratorios toda vez que solo hasta la fecha de emisión de la sentencia se le está ordenando al empleador reconocer y pagar el cálculo actuarial por los periodos no cotizados al demandante ante la falta de cobertura del ISS, por lo que COLPENSIONES negó la pensión con fundamento en las semanas válidamente certificadas en la historia laboral. En subsidio condenó a la entidad a indexar las sumas adeudadas para compensar la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.

2.2. RECURSO DE APELACION

2.1. ARGUMENTOS DE COLPENSIONES

Señaló que cuando la entidad realizó el estudio para el reconocimiento de la pensión de vejez, a través de la Resolución 389206 de 2014, el demandante no cumplía con los requisitos del Decreto 758 de 1990 para acceder a la prestación, pues solo tenía un total de 969.19 semanas cotizadas, por tanto no se debe condenar al retroactivo de la pensión ni a las costas, pues solo a través de esta sentencia COLPENSIONES se dio cuenta que debe pagar la prestación, por lo que la pensión solo se debe conceder a partir de la fecha de la sentencia, conforme lo analizó la CSJ en sentencia con radicado SL 704 de 2013, radicación 44454.

2.2. ARGUMENTOS DE C.I. BANACOL

Indicó que el demandante no cumple con ninguno de los requisitos para tener derecho a que en el cálculo de la pensión de vejez se le tenga en cuenta las semanas de servicio anteriores al 1º de agosto de 1986, toda vez que la terminación del contrato laboral ocurrió el 20 de diciembre de 1983, por lo que no puede afirmarse que le era aplicable la Ley 100 de 1993, dato que este laboró antes de la expedición de dicha norma que fue la que creó la obligación de la emisión de un título pensional y por tanto antes de la Ley 100, solo existía la obligación de un aprovisionamiento de aportes con base en la Ley 90 de 1946, sin que en el presente caso pueda aplicarse la Ley 100 de forma retroactiva a una relación laboral que no se rigió por esta normatividad, por lo que solo sería procedente un aprovisionamiento y no un

bono pensional, conforme lo analizó por la Corte Constitucional en sentencia T-160 de 2014, por lo que debe revocarse la sentencia respecto a la orden dada a CI BANACOL de expedir un título o bono pensional.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

De acuerdo a las inconformidades planteadas por los apoderados de las partes el problema jurídico se suscribe a determinar:

- Si en el presente caso es procedente condenarse a C.I. BANACOL SA al pago de los aportes por el tiempo laborado en dicha empresa durante los cuales no se hicieron cotizaciones al ISS por falta de cobertura de la entidad en el lugar donde laboraba el actor.
- De otro lado se analizará desde que fecha se debe reconocer la pensión del actor.

Así mismo, conforme lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencia 40.200 de 2015 con ponencia de la Dra. Clara Cecilia Dueñas, esta Magistratura analizará en grado jurisdiccional de CONSULTA los temas que no fueron objeto de apelación por parte de Colpensiones con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de la entidad, por lo que se analizará si el actor tiene derecho a la pensión de vejez y los términos en que le fue reconocida por el despacho.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, no es objeto de discusión que el señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA laboró para la sociedad C.I. BANACOL S.A. en la zona de Urabá entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año y que durante este lapso no se hicieron aportes a pensión por falta de cobertura del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en la zona, tal y como lo acepta la sociedad C.I. BANACOL S.A en la respuesta a la demanda y en certificación visible a folios 55/56 del plenario.

Sin embargo, indica la apoderada de la sociedad C.I. BANACOL S.A. que no debe condenarse al pago del título pensional por el periodo laborado por el señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA en dicha empresa durante el cual no se hicieron aportes por falta de cobertura en la zona, argumentando que la entidad no tenía ninguna obligación legal de efectuar aportes en esa época por falta de cobertura en el lugar de prestación del servicio y además porque la relación laboral no estaba vigente para a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

Sin embargo, es claro que a partir de las sentencias 41745 y 45107 de 2014 la Corte Suprema de Justicia fijó un criterio mayoritario en las cuales varió las antiguas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador, en cuanto entendía que no incurría en omisión de afiliación de sus trabajadores y pago de cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, en aquellas regiones del país en las que no había cobertura del ISS, y se consideró que era viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en algunos lugares de la geografía nacional, fueran calculados a través de títulos pensionales a cargo del empleador, con el fin de que el trabajador completara la densidad de cotizaciones exigida por la ley.

En la sentencia con radicado 41745 del 16 de julio de 2014 con ponencia de la magistrada ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERON, la Corte definió:

“(i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones; (ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, y (iii) que la manera de concretar ese gravamen, en casos «(...) en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar (...) que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social».

Posición reiterada en múltiples oportunidades como en la sentencia 43182 de 2015, 45209 de 2016, 64168, 47532, 37779 y 46840 de 2017:

De otro lado, frente al argumento, que no procede el cálculo actuarial porque el contrato de trabajo culminó en el año 1983, es decir, antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, situación que de acuerdo con el literal c) del art. 33 de ley en cita, no permitiría su aplicación, este requerimiento fue calificado por la Corte Suprema de Justicia como innecesario, pues contrariaba los axiomas de la seguridad social, en tanto que la obligación de la afiliación es permanente e incondicional. En sentencia 57129 del 24 de febrero de 2016 se dijo:

“En este aspecto, desde las sentencias CSJ SL, 20 mar. 2013, rad. 42398 y CSJ SL646-2013 esta Sala de la Corte ya había justificado la necesidad de inaplicar ese tipo de condicionamientos, por ser contrarios a la intención del legislador plasmada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. En dichas decisiones se recalcó que «...la Ley 797 de 2003 no estaba creando por primera vez la obligación del empleador de responder por el tiempo servido por el trabajador sin la afiliación debida, puesto que esta obligación, en esencia, ha existido desde el momento mismo en que surgió, para este, la obligación de afiliar al trabajador al ISS. Con la modificación introducida por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 lo que se quiso fue adecuar al régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993, la forma de hacer el cómputo de los tiempos laborados por el trabajador para un empleador que fue omiso en su deber de afiliación al régimen de pensiones, en cualquier época....»

También la Sala considera pertinente destacar que ese presupuesto de vigencia del contrato de trabajo, en una época determinada, deviene innecesario y contrario a los postulados de la seguridad social que ya se han reseñado, pues la obligación de afiliación es permanente e incondicional, a la vez que encuentra su causa en la prestación de los servicios del trabajador (CSJ SL, 30 Sep 2008, Rad. 33476), sin que en ello influya, en principio, la época en la que se mantuvo vigente la relación laboral.

Debe insistirse, de igual forma, en que la intención del sistema de seguridad social es la de integrar y solucionar financieramente las omisiones en la afiliación que se presentaron en el pasado, por cualquier causa (CSJ SL14388-2015), para garantizarle una protección adecuada y completa a los afiliados en sus contingencias, propósito para el cual no es relevante el hecho de que el contrato mantenga su vigencia en una determinada época, pues desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, los empleadores mantenían la carga de la afiliación y, en subsidio de ello, de aprovisionamiento de los recursos necesarios para contribuir a la financiación de las pensiones.”

En consecuencia concluye la Sala que le asistió razón al a quo en condenar a la sociedad CI BANACOL SA a pagar a COLPENSIONES el título pensional a favor del demandante por el periodo comprendido entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia en este punto.

De otro lado, respecto a la procedencia de la pensión de vejez que se revisa en virtud de la CONSULTA, debe indicarse que, no es objeto de discusión que en virtud de la edad, el señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que tenía más de 40 años al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del régimen pensional para el sector privado, lo cual le permite que para el reconocimiento de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad, tiempo y monto del Decreto 758 de 1990, que exige acreditar 60 años de edad, en el caso de las hombres y 1000 semanas en cualquier época o 500 cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida.

Así mismo es importante tener en cuenta la reforma que realizó el CONGRESO DE LA REPÚBLICA cuando expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional y limitó el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993, restringiendo su aplicación hasta el 31 de julio de 2010, salvo para quienes a su entrada en vigencia tuvieran más de 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, con el fin de proteger su expectativa legítima, a los cuales se les mantendría hasta el año 2014.

Conforme las pruebas allegadas se tiene que el señor EUSSE SAAVEDRA arribó a los 60 años de edad 10 de agosto de 2012, lo que significa que para que el régimen de transición se le extendiera hasta 2014, era preciso acreditar que había cotizado 750 semanas al 29 de julio de 2005 cuando entró en vigencia el aludido Acto legislativo, requisito que acredita el actor ampliamente, pues conforme a la historia laboral visible a folios 92/94 para tal data contaba con 964 semanas cotizadas.

Ahora, respecto a las semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez, se tiene que a las 964 semanas que aparecen reflejadas en la historia laboral a folios 92/94 se deben sumar las 26.86 semanas laboradas con CI BANACOL entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año, durante las cuales no se cotizó por falta de cobertura y cuyo pago se ordenó en la sentencia

que se revisa en consulta a través de un título pensional, con las cuales completaría 990.86 semanas, que serían insuficientes para acceder al derecho pensional.

Sin embargo, al revisar el detalle de pagos efectuados a favor del señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA se observa que existen varios periodos con inconsistencias, donde se a pesar de que se evidencia la fecha de pago, el IBC reportado, el referente de pago y los días reportados por el empleador, la entidad contabiliza menos días de los realmente cotizados como en marzo y septiembre de 1999, o no se contabiliza ninguna cotización, como los periodos de abril y mayo de 1996 o el ciclo de julio de 2002, que la entidad no lo reporta, salta de junio a agosto de 2002, sin que este precedido del reporte de la novedad de retiro que indique que la relación laboral se vio interrumpida en dicho ciclo, por lo que se trata de una omisión del empleador en el aporte de dicho ciclo, el cual debe contabilizarse para todos los efectos ya que la mora del empleador no tiene porque afectar al afiliado.

Debe precisarse que, aunque en los ciclos que presentan inconsistencias y fueron desconocidos por la entidad, se tratare de periodos donde el empleador omitió hacer el pago de los aportes o lo hizo de forma extemporánea, para todos los efectos, se han de totalizar en la Historia Laboral, toda vez que ésta Magistratura comparte la tesis según la cual, como lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, quien es el llamado a responder por la prestación es el Fondo de Pensiones, pues la ley lo dotó con facultades legales y mecanismos coactivos para ejercer las acciones de cobro en caso de mora por parte de un empleador. Si dicha entidad no hizo uso de los mismos, no puede alegar su propia negligencia para escudarse del reconocimiento de prestaciones alegando la omisión en el pago de aportes, y la consecuencia a dicha negligencia, no puede ser en ningún momento que la afiliada pierda el derecho a su pensión. Véase para el efecto la sentencia hito del 22 de julio de 2008, Radicación 34270. Posición reiterada en forma pacífica en sentencias como la de radicado 53782 de 2018, donde se dijo:

“Sobre la línea jurisprudencial, garantizadora de los derechos de los trabajadores frente a empleadores morosos con el sistema de seguridad social y administradoras de pensiones negligentes en el recaudo de los aportes, la sentencia SL1363-2018 del 11 de abril de 2018, la rememoró así:

“Para responder al requerimiento de la censura, ésta Sala de Casación ratifica, que desde la sentencia CSJ SL 22, jul, 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia respecto a los efectos de la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es por ello que a partir de la referida providencia, la Corte estableció que cuando se presente dicha situación, y esto necesariamente impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios.

También hizo expresa precisión la Corte, para el caso concreto de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que, si estos han cumplido cabalmente con el deber que les asiste frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que, antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro.”

Por lo anterior, se reitera que, para efectos de calcular las semanas cotizadas por el afiliado, con el propósito de establecer si efectivamente se cumplen los presupuestos legales, tendientes a obtener el derecho pensional, deben tenerse en cuenta no sólo las consignadas oportunamente, sino también las que se encuentran en mora, siempre que no haya mediado gestión de cobro por parte de la AFP a la cual se encontraba afiliado. Estos criterios han sido reiterados por la Sala de forma constante, entre otras, se pueden consultar las sentencias de la CSJ SL 17 may. 2011, rad. 38622; SL, 6 feb. 2013, rad. 45173; SL 8715-2014, rad. 42989; SL 14388-2015, rad. 43182; SL 14987-2016, rad. 46408; y SL 15980-2016 rad. 69294.”

Por tanto se tiene que el señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA presenta 10.71 semanas con inconsistencias o mora que deben ser totalizadas, así:

INCONSISTENCIAS	DIAS COTIZADOS	DIAS CONTABILIZADOS	DIAS FALTANTES
1996-03	30	22	8
1996-04	30	0	30
1996-05	5	0	5
1999-09	30	28	2
2002-07	30	0	30
días			75
semanas			10.71

Por consiguiente, al sumar las 10.71 semanas con inconsistencias, con las 964 semanas reportadas en la historia laboral y las 26.86 semanas del titulo pensional a cargo de C.I. BANACOL SA se tiene que el señor EUSSE SAAVEDRA cotizó en toda la vida laboral un total de 1.001,57 semanas, así:

EMPLEADOR	DESDE	HASTA	DIAS	SEMANAS	DIAS MORA	SEMANAS MORA	TOTAL DIAS	TOTAL SEMANAS
INDUBOTON	18/02/1972	11/04/1972	54	7,71	0	0	54	7,71
ENKA DE COLOMBIA SA	18/12/1972	1/09/1975	988	141,14	0	0	988	141,14
TEXTILES LEMUR 700	15/01/1976	16/08/1976	215	30,71	0	0	215	30,71
LA COMPAÑIA SEGURA L	2/12/1976	11/03/1977	100	14,29	0	0	100	14,29
INDUSTRIAS CQ LTDA	21/03/1977	15/03/1978	360	51,43	0	0	360	51,43
VARIEDADES CARIBU LT	12/05/1978	15/04/1979	339	48,43	0	0	339	48,43
DISTRIBUCIONES ANTIO	18/10/1979	30/01/1981	471	67,29	0	0	471	67,29
PRC WATERHOUSE	7/07/1981	30/08/1982	420	60	0	0	420	60
CONTRATISTAS ASOCIAD	13/09/1982	10/01/1983	120	17,14	0	0	120	17,14
C.I. BANACOL	15/06/1983	20/12/1983	0	0	188	26,86	188	26,86
CIA ANTINA DE TEXTIL	10/04/1985	4/12/1986	604	86,29	0	0	604	86,29
INDUSTRIAS DAVIDI	26/05/1987	28/09/1988	492	70,29	0	0	492	70,29
PINSKI ASOCIADOS L	20/09/1988	31/12/1988	94	13,43	0	0	94	13,43
ABRASIVOS DE COLOMBIA	12/04/1989	20/02/1990	315	45	0	0	315	45,00
POLIKEM LTDA	9/02/1990	26/07/1990	156	22,29	0	0	156	22,29
ADOLFO AYASO CONSULT	28/11/1990	7/11/1991	345	49,29	0	0	345	49,29
NAVICHRISTMAS LTDA	8/06/1993	1/03/1994	267	38,14	0	0	267	38,14
HINESTROSA Y CIA	21/09/1994	31/12/1994	102	14,57	0	0	102	14,57
HINESTROSA Y CIA	1/01/1995	5/06/1996	442	63,14	43	6	485	69,29
DISMELEC LTDA	1/05/1998	30/06/1998	60	8,57	0	0	60	8,57
HOSPITAL SAN JUAN DE	1/09/1998	11/06/2000	639	91,29	2	0,29	641	91,57
HOSPITAL SAN JUAN DE	5/02/2002	20/08/2002	165	23,57	30	4	195	27,86
TOTAL							7011	1001,58

En consecuencia se tiene que el demandante acredita más de las 1.000 semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990 y por tanto tiene derecho a acceder a la pensión de vejez, de conformidad con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 758 de 1990, como de forma acertada lo estimó el a quo, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia en este punto.

Así mismo encuentra acertada la decisión del a quo de que el disfrute de la prestación debe ser a partir del 10 de agosto de 2012, día en que el demandante cumplió los 60 años de edad, pues para dicha fecha ya contaba con las semanas exigidas y se encontraba retirado del sistema general de pensiones desde el 20 de agosto de 2002, sin que sea atendible el argumento del apoderado de COLPENSIONES de que no procede el retroactivo porque la entidad negó la pensión con una razón atendible, ya que la tesis que se invoca y que fue estudiada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 44454 de 2013 a la cual hace referencia el apoderado, es para la aplicación de los intereses moratorios donde si se analiza si la negativa de la entidad estuvo amparada en la aplicación de la ley, no pudiendo ser extensible al retroactivo pensional, el cual en los términos del artículo 13 del Decreto 758 de 1990, procede cuando se reúnan los requisitos de edad y numero de semanas y se de el retiro o desafiliación del sistema, el cual puede ser tácito o expreso, por lo que en el caso de autos el momento en el que confluyen dichos presupuestos es el del arribó a los 60 años, como de forma acertada lo analizó el a a quo.

Respecto a la excepción de prescripción, estima la Sala que dicho fenómeno no afectó ninguna mesada pensional, toda vez que el demandante solicitó la pensión el 23 de agosto de 2013 (fl 29), siéndole negada a través de la Resolución GNR 7994 de 2014, notificada el 17 de febrero del mismo año (fl 28) t la demanda se radicó el 31 de marzo de 2016, antes de que transcurriera el término trienal de que tratan los artículos 151 del CPT y 488 del CST.

Así mismo, en virtud de la consulta se revisó la liquidación del IBL efectuado por el a quo, teniendo en cuenta en promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ya que al actor le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, conforme lo dispone el inciso 3º del artículo 36 de la misma normativa, así:

DESDE	HASTA	IBC O SALARIO	No. DIAS	SALARIO INDEXADO	PROMEDIO	AÑO FINAL	INDICE IPC FINAL	AÑO INICIAL	INDICE IPC INICIAL
1-dic-85	31-dic-85	\$ 47.370	23	\$ 1.842.820	\$ 11.774	2011	76,19	1984	1,96
1-ene-86	31-ene-86	\$ 47.370	31	\$ 1.504.913	\$ 12.959	2011	76,19	1985	2,40
1-feb-86	28-feb-86	\$ 47.370	28	\$ 1.504.913	\$ 11.705	2011	76,19	1985	2,40
1-mar-86	31-mar-86	\$ 47.370	31	\$ 1.504.913	\$ 12.959	2011	76,19	1985	2,40
1-abr-86	30-abr-86	\$ 47.370	30	\$ 1.504.913	\$ 12.541	2011	76,19	1985	2,40
1-may-86	31-may-86	\$ 47.370	31	\$ 1.504.913	\$ 12.959	2011	76,19	1985	2,40
1-jun-86	30-jun-86	\$ 47.370	30	\$ 1.504.913	\$ 12.541	2011	76,19	1985	2,40
1-jul-86	31-jul-86	\$ 61.950	31	\$ 1.968.109	\$ 16.948	2011	76,19	1985	2,40
1-ago-86	31-ago-86	\$ 61.950	31	\$ 1.968.109	\$ 16.948	2011	76,19	1985	2,40

1-sep-86	30-sep-86	\$ 61.950	30	\$ 1.968.109	\$ 16.401	2011	76,19	1985	2,40
1-oct-86	31-oct-86	\$ 61.950	31	\$ 1.968.109	\$ 16.948	2011	76,19	1985	2,40
1-nov-86	30-nov-86	\$ 61.950	30	\$ 1.968.109	\$ 16.401	2011	76,19	1985	2,40
1-dic-86	31-dic-86	\$ 61.950	31	\$ 1.968.109	\$ 16.948	2011	76,19	1985	2,40
1-may-87	31-may-87	\$ 61.950	6	\$ 1.627.003	\$ 2.712	2011	76,19	1986	2,90
1-jun-87	30-jun-87	\$ 61.950	30	\$ 1.627.003	\$ 13.558	2011	76,19	1986	2,90
1-jul-87	31-jul-87	\$ 61.950	31	\$ 1.627.003	\$ 14.010	2011	76,19	1986	2,90
1-ago-87	31-ago-87	\$ 61.950	31	\$ 1.627.003	\$ 14.010	2011	76,19	1986	2,90
1-sep-87	30-sep-87	\$ 61.950	30	\$ 1.627.003	\$ 13.558	2011	76,19	1986	2,90
1-oct-87	31-oct-87	\$ 70.260	31	\$ 1.845.250	\$ 15.890	2011	76,19	1986	2,90
1-nov-87	30-nov-87	\$ 70.260	30	\$ 1.845.250	\$ 15.377	2011	76,19	1986	2,90
1-dic-87	31-dic-87	\$ 70.260	31	\$ 1.845.250	\$ 15.890	2011	76,19	1986	2,90
1-ene-88	31-ene-88	\$ 70.260	31	\$ 1.487.937	\$ 12.813	2011	76,19	1987	3,60
1-feb-88	29-feb-88	\$ 70.260	29	\$ 1.487.937	\$ 11.986	2011	76,19	1987	3,60
1-mar-88	31-mar-88	\$ 70.260	31	\$ 1.487.937	\$ 12.813	2011	76,19	1987	3,60
1-abr-88	30-abr-88	\$ 89.070	30	\$ 1.886.287	\$ 15.719	2011	76,19	1987	3,60
1-may-88	31-may-88	\$ 89.070	31	\$ 1.886.287	\$ 16.243	2011	76,19	1987	3,60
1-jun-88	30-jun-88	\$ 89.070	30	\$ 1.886.287	\$ 15.719	2011	76,19	1987	3,60
1-jul-88	31-jul-88	\$ 89.070	31	\$ 1.886.287	\$ 16.243	2011	76,19	1987	3,60
1-ago-88	31-ago-88	\$ 89.070	31	\$ 1.886.287	\$ 16.243	2011	76,19	1987	3,60
1-sep-88	30-sep-88	\$ 89.070	28	\$ 1.886.287	\$ 23.600	2011	76,19	1987	3,60
1-sep-88	30-sep-88	\$ 99.630	20	\$ 2.109.922	\$ 11.722	2011	76,19	1987	3,60
1-oct-88	31-oct-88	\$ 99.630	31	\$ 2.109.922	\$ 18.169	2011	76,19	1987	3,60
1-nov-88	30-nov-88	\$ 99.630	30	\$ 2.109.922	\$ 17.583	2011	76,19	1987	3,60
1-dic-88	31-dic-88	\$ 99.630	31	\$ 2.109.922	\$ 18.169	2011	76,19	1987	3,60
1-ene-89	31-ene-89	\$ 99.630	31	\$ 1.646.845	\$ 14.181	2011	76,19	1988	4,61
1-feb-89	28-feb-89	\$ 99.630	28	\$ 1.646.845	\$ 12.809	2011	76,19	1988	4,61
1-mar-89	31-mar-89	\$ 150.270	31	\$ 2.483.905	\$ 21.389	2011	76,19	1988	4,61
1-abr-89	30-abr-89	\$ 150.270	11	\$ 2.483.905	\$ 7.590	2011	76,19	1988	4,61
1-abr-89	30-abr-89	\$ 165.180	19	\$ 2.730.361	\$ 14.410	2011	76,19	1988	4,61
1-may-89	31-may-89	\$ 111.000	31	\$ 1.834.787	\$ 15.800	2011	76,19	1988	4,61
1-jun-89	30-jun-89	\$ 150.270	30	\$ 2.483.905	\$ 20.699	2011	76,19	1988	4,61
1-jul-89	31-jul-89	\$ 150.270	31	\$ 2.483.905	\$ 21.389	2011	76,19	1988	4,61
1-ago-89	31-ago-89	\$ 150.270	31	\$ 2.483.905	\$ 21.389	2011	76,19	1988	4,61
1-sep-89	30-sep-89	\$ 150.270	30	\$ 2.483.905	\$ 20.699	2011	76,19	1988	4,61
1-oct-89	31-oct-89	\$ 150.270	31	\$ 2.483.905	\$ 21.389	2011	76,19	1988	4,61
1-nov-89	30-nov-89	\$ 150.270	30	\$ 2.483.905	\$ 20.699	2011	76,19	1988	4,61
1-dic-89	31-dic-89	\$ 150.270	31	\$ 2.483.905	\$ 21.389	2011	76,19	1988	4,61
1-ene-90	31-ene-90	\$ 150.270	31	\$ 1.970.365	\$ 16.967	2011	76,19	1989	5,81
1-feb-90	28-feb-90	\$ 150.270	20	\$ 1.970.365	\$ 10.946	2011	76,19	1989	5,81
1-feb-90	28-feb-90	\$ 215.806	21	\$ 2.829.684	\$ 16.506	2011	76,19	1989	5,81
1-mar-90	31-mar-90	\$ 165.180	31	\$ 2.165.868	\$ 18.651	2011	76,19	1989	5,81
1-abr-90	30-abr-90	\$ 165.180	30	\$ 2.165.868	\$ 18.049	2011	76,19	1989	5,81
1-may-90	31-may-90	\$ 165.180	31	\$ 2.165.868	\$ 18.651	2011	76,19	1989	5,81
1-jun-90	30-jun-90	\$ 165.180	30	\$ 2.165.868	\$ 18.049	2011	76,19	1989	5,81
1-jul-90	31-jul-90	\$ 165.180	26	\$ 2.165.868	\$ 15.642	2011	76,19	1989	5,81
1-nov-90	30-nov-90	\$ 136.290	3	\$ 1.787.057	\$ 1.489	2011	76,19	1989	5,81
1-dic-90	31-dic-90	\$ 136.290	31	\$ 1.787.057	\$ 15.389	2011	76,19	1989	5,81
1-ene-91	31-ene-91	\$ 136.290	31	\$ 1.350.963	\$ 11.633	2011	76,19	1990	7,69
1-feb-91	28-feb-91	\$ 136.290	28	\$ 1.350.963	\$ 10.507	2011	76,19	1990	7,69
1-mar-91	31-mar-91	\$ 136.290	31	\$ 1.350.963	\$ 11.633	2011	76,19	1990	7,69
1-abr-91	30-abr-91	\$ 136.290	30	\$ 1.350.963	\$ 11.258	2011	76,19	1990	7,69
1-may-91	31-may-91	\$ 136.290	31	\$ 1.350.963	\$ 11.633	2011	76,19	1990	7,69
1-jun-91	30-jun-91	\$ 136.290	30	\$ 1.350.963	\$ 11.258	2011	76,19	1990	7,69
1-jul-91	31-jul-91	\$ 136.290	31	\$ 1.350.963	\$ 11.633	2011	76,19	1990	7,69
1-ago-91	31-ago-91	\$ 136.290	31	\$ 1.350.963	\$ 11.633	2011	76,19	1990	7,69
1-sep-91	30-sep-91	\$ 136.290	30	\$ 1.350.963	\$ 11.258	2011	76,19	1990	7,69
1-oct-91	31-oct-91	\$ 136.290	31	\$ 1.350.963	\$ 11.633	2011	76,19	1990	7,69
1-nov-91	30-nov-91	\$ 136.290	7	\$ 1.350.963	\$ 2.627	2011	76,19	1990	7,69
1-jun-93	30-jun-93	\$ 150.270	23	\$ 939.616	\$ 6.003	2011	76,19	1992	12,19
1-jul-93	31-jul-93	\$ 150.270	31	\$ 939.616	\$ 8.091	2011	76,19	1992	12,19
1-ago-93	31-ago-93	\$ 150.270	31	\$ 939.616	\$ 8.091	2011	76,19	1992	12,19
1-sep-93	30-sep-93	\$ 150.270	30	\$ 939.616	\$ 7.830	2011	76,19	1992	12,19
1-oct-93	31-oct-93	\$ 150.270	31	\$ 939.616	\$ 8.091	2011	76,19	1992	12,19
1-nov-93	30-nov-93	\$ 150.270	30	\$ 939.616	\$ 7.830	2011	76,19	1992	12,19
1-dic-93	31-dic-93	\$ 150.270	31	\$ 939.616	\$ 8.091	2011	76,19	1992	12,19
1-ene-94	31-ene-94	\$ 150.270	31	\$ 766.873	\$ 6.604	2011	76,19	1993	14,93
1-feb-94	28-feb-94	\$ 150.270	28	\$ 766.873	\$ 5.965	2011	76,19	1993	14,93
1-mar-94	31-mar-94	\$ 150.270	31	\$ 766.873	\$ 6.604	2011	76,19	1993	14,93
1-ene-95	31-ene-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-feb-95	28-feb-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-mar-95	31-mar-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-abr-95	30-abr-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-may-95	31-may-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-jun-95	30-jun-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-jul-95	31-jul-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-ago-95	31-ago-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-sep-95	30-sep-95	\$ 169.998	30	\$ 708.093	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-oct-95	31-oct-95	\$ 170.000	30	\$ 708.101	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29
1-nov-95	30-nov-95	\$ 169.999	30	\$ 708.097	\$ 5.901	2011	76,19	1994	18,29

1-dic-95	31-dic-95	\$ 85.000	30	\$ 354.050	\$ 2.950	2011	76,19	1994	18,29
1-ene-96	31-ene-96	\$ 169.999	30	\$ 593.202	\$ 4.943	2011	76,19	1995	21,83
1-feb-96	29-feb-96	\$ 169.998	30	\$ 593.199	\$ 4.943	2011	76,19	1995	21,83
1-mar-96	31-mar-96	\$ 169.998	30	\$ 593.199	\$ 4.943	2011	76,19	1995	21,83
1-abr-96	30-abr-96	\$ 169.998	30	\$ 593.199	\$ 4.943	2011	76,19	1995	21,83
1-may-96	31-may-96	\$ 28.334	5	\$ 98.870	\$ 137	2011	76,19	1995	21,83
1-may-98	31-may-98	\$ 203.826	30	\$ 497.350	\$ 4.145	2011	76,19	1997	31,23
1-jun-98	30-jun-98	\$ 203.826	30	\$ 497.350	\$ 4.145	2011	76,19	1997	31,23
1-sep-98	30-sep-98	\$ 828.819	30	\$ 2.022.377	\$ 16.853	2011	76,19	1997	31,23
1-oct-98	31-oct-98	\$ 1.657.638	30	\$ 4.044.754	\$ 33.706	2011	76,19	1997	31,23
1-nov-98	30-nov-98	\$ 828.819	30	\$ 2.022.377	\$ 16.853	2011	76,19	1997	31,23
1-dic-98	31-dic-98	\$ 1.657.638	30	\$ 4.044.754	\$ 33.706	2011	76,19	1997	31,23
1-ene-99	31-ene-99	\$ 1.763.727	30	\$ 3.689.327	\$ 30.744	2011	76,19	1998	36,42
1-feb-99	28-feb-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-mar-99	31-mar-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-abr-99	30-abr-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-may-99	31-may-99	\$ 1.763.728	30	\$ 3.689.329	\$ 30.744	2011	76,19	1998	36,42
1-jun-99	30-jun-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-jul-99	31-jul-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-ago-99	31-ago-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-sep-99	30-sep-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-oct-99	31-oct-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-nov-99	30-nov-99	\$ 1.889.708	30	\$ 3.952.851	\$ 32.940	2011	76,19	1998	36,42
1-dic-99	31-dic-99	\$ 2.127.042	30	\$ 4.449.302	\$ 37.078	2011	76,19	1998	36,42
1-ene-00	31-ene-00	\$ 1.731.444	30	\$ 3.315.702	\$ 27.631	2011	76,19	1999	39,79
1-feb-00	29-feb-00	\$ 1.731.444	30	\$ 3.315.702	\$ 27.631	2011	76,19	1999	39,79
1-mar-00	31-mar-00	\$ 1.889.708	30	\$ 3.618.776	\$ 30.156	2011	76,19	1999	39,79
1-abr-00	30-abr-00	\$ 1.889.708	30	\$ 3.618.776	\$ 30.156	2011	76,19	1999	39,79
1-may-00	31-may-00	\$ 1.889.708	30	\$ 3.618.776	\$ 30.156	2011	76,19	1999	39,79
1-jun-00	30-jun-00	\$ 692.893	11	\$ 1.326.885	\$ 4.054	2011	76,19	1999	39,79
1-feb-02	28-feb-02	\$ 1.624.174	25	\$ 2.656.917	\$ 18.451	2011	76,19	2001	46,58
1-mar-02	31-mar-02	\$ 1.949.009	30	\$ 3.188.301	\$ 26.569	2011	76,19	2001	46,58
1-abr-02	30-abr-02	\$ 1.949.009	30	\$ 3.188.301	\$ 26.569	2011	76,19	2001	46,58
1-may-02	31-may-02	\$ 2.313.760	30	\$ 3.784.982	\$ 31.542	2011	76,19	2001	46,58
1-jun-02	30-jun-02	\$ 2.043.341	30	\$ 3.342.615	\$ 27.855	2011	76,19	2001	46,58
1-jul-02	31-jul-02	\$ 2.043.341	30	\$ 3.342.615	\$ 27.855	2011	76,19	2001	46,58
1-ago-02	31-ago-02	\$ 1.362.227	20	\$ 2.228.409	\$ 12.380	2011	76,19	2001	46,58

TOTAL	
DIAS	3600
TOTAL SEMANAS	514,29

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN	\$ 1.987.350,25
SEMANAS COTIZADAS	514
PENSION A RECONOCER	\$ 1.490.512,69
PORCENTAJE APLICADO	75%
PENSION RECONOCIDA	\$ 1.463.360
DIFERENCIA	\$ 27.152,69

Encontrando que al actor le correspondería una mesada para el 2012 de \$1.490.513 la cual es ligeramente superior a la liquidada por el a quo por valor de \$1.463.360, sin embargo, como la sentencia no fue apelada por la parte actora, no se hará ninguna modificación para no hacer mas gravosa la situación de la entidad a cuyo favor se revisa en consulta.

Así mismo se encuentra que es acertada la liquidación del retroactivo adeudado entre el 10 de agosto de 2012 y el 30 de septiembre de 2019 que asciende a **\$154.968.496, así:**

Año	IPC	# mesadas	Valor pensión	Total Retroactivo
2012	2,44%	5 y 20 días	\$ 1.463.360	\$ 8.292.373
2013	1,94%	13	\$ 1.499.066	\$ 19.487.857
2014	3,66%	13	\$ 1.528.148	\$ 19.865.922
2015	6,77%	13	\$ 1.584.078	\$ 20.593.015
2016	5,75%	13	\$ 1.691.320	\$ 21.987.162
2017	4,09%	13	\$ 1.788.571	\$ 23.251.423
2018	3,18%	13	\$ 1.861.724	\$ 24.202.407
2019	3,80%	9	\$ 1.920.926	\$ 17.288.338

TOTAL	\$ 154.968.496
-------	----------------

Por lo que concluye la Sala que los términos en que fue reconocida la pensión de vejez por el juez de primera instancia se encuentran ajustados a derecho.

Sin embargo, estima la Sala que el reconocimiento de la prestación debe estar sometido al recaudo del título pensional a cargo de CI BANACOL SA cuyo pago se ordenó a través de la sentencia que se revisa en CONSULTA, pues dicho tiempo es posible contabilizarlo en virtud de lo dispuesto en el literal d) del párrafo del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que dispone que para efectos del cómputo de las semanas a que alude la norma se tendrá en cuenta

*“El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.” Caso en el cual, la norma establece expresamente que el cómputo será procedente **siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.**(negrillas fuera de texto)*

Bajo este panorama, sólo una vez cancelado el correspondiente título a satisfacción de Colpensiones, nacerá la obligación de **computar** dichos períodos en la Historia Laboral y consecuentemente de reconocer la pensión de vejez al demandante en los términos indicados por el despacho, pues mientras ello no ocurra, el fondo NO tiene la obligación de computar los períodos faltantes, razón por la que no es dable a esta Magistratura ordenar el pago de la prestación, pues si bien se ajustan a derecho los parámetros bajo los cuales la juez analizó su procedencia, su reconocimiento está sometido al recaudo efectivo del título pensional.

Por consiguiente, la Sala **MODIFICARÁ** la orden impartida **para** indicar que la sociedad **C.I. BANACOL SA** deberá informar a **COLPENSIONES**, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de los salarios percibidos por el señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año; una vez recibida tal información **COLPENSIONES** dentro de los 30 días siguientes liquidara el valor a cancelar por cálculo actuarial y notificara el mismo a la sociedad **C.I. BANACOL SA**, quien deberá pagarlo a entera satisfacción dentro de los 30 días siguientes, procediendo COLPENSIONES, una vez recibido su monto a consolidar la historia laboral y a reconocer y pagar la pensión de vejez al señor JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA en los términos ordenados en la sentencia de primera instancia.

De otro lado, encuentra la Sala que también es acertada la condena a la indexación, pues conforme lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia esta procede para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por el transcurso del tiempo, pues el dinero correspondiente a las mesadas pensionales adeudadas aún no ha ingresado al patrimonio del demandante y cuando lo haga se habrá visto envilecido o depreciado, por lo que también se **CONFIRMARÁ** la sentencia en este punto.

Finalmente, respecto a la procedencia de la condena en costas, estima la Sala, que le asiste razón al apoderado de COLPENSIONES dado que cuando la entidad negó la prestación al actor no cumplía los requisitos para pensionarse, pues estos solo los alcanza conforme a la presente sentencia donde se está ordenando al empleador el pago del título pensional, por tanto es claro que la necesidad del demandante de acudir a la jurisdicción ordinaria para reclamar el derecho prestacional, no obedeció a un capricho de la entidad, sino, se insiste, al acatamiento de la ley, y por tanto considera la Sala que no hay lugar al reconocimiento de costas procesales en ninguna de las instancias.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA PARCIALMENTE con las modificaciones a que se hizo referencia.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMRO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2019 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.037.375 contra **COLPENSIONES** y la sociedad **CI BANACOL SA**, con las siguientes modificaciones:

SEGUNDO: MODIFICA los numerales **primero y segundo**, para ordenar a la sociedad **C.I. BANACOL SA** informar a **COLPENSIONES**, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el valor de los salarios percibidos por el señor **JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA** entre el 15 de junio de 1983 y el 20 de diciembre del mismo año. Y una vez recibida tal información **COLPENSIONES deberá** dentro de los 30 días siguientes liquidara el valor a cancelar por cálculo actuarial y notificara el mismo a la sociedad **C.I. BANACOL SA**, quien deberá pagarlo a entera satisfacción dentro de los 30 días siguientes.

TERCERO: MODIFICA el numeral tercero en el sentido que **COLPENSIONES**, una vez recibido el pago del título pensional por parte de **CI BANACOL** procederá a consolidar la historia laboral y a reconocer y

pagar la pensión de vejez al señor **JORGE ALIRIO EUSSE SAAVEDRA** en los términos ordenados en la sentencia de primera instancia.

CUARTO: REVOCA la condena en costas y **ABSUELVE** de dicho concepto.

QUINTO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto, se notifica en **ESTADOS** y se firma por quienes en ella intervinieron.

Los Magistrados

(firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

CERTIFICO: Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS No. 103 fijados hoy en la secretaría de
este Tribunal a las 8 a.m.
Medellín 16 DE JUNIO DE 2021

Secretario